



## **SALA TERCERA DE DECISIÓN LABORAL**

### **AUDIENCIA DE JUZGAMIENTO**

**Medellín, veinticuatro de junio de dos mil veintidós**

#### **21-216**

Proceso: **CONSULTA- PROCESO UNICA INSTANCIA**  
Demandante: **ROBERTO ANTONIO BEDOYA RODRÍGUEZ**  
Demandado: **COLPENSIONES**  
Radicado No.: **05088-31-05-001-2017-00368-01**  
Decisión: **CONFIRMA ABSOLUCIÓN**

La Sala Tercera de Decisión Laboral del Tribunal Superior de Medellín, conformada por los Magistrados **LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL**, **MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO** y como ponente **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, procede a conocer en el grado jurisdiccional de consulta la sentencia de única instancia proferida dentro del proceso de la referencia.

Conforme al memorial allegado se reconoce personería a la doctora SARA BOTERO GARCIA identificado (a) con C.C. No. 1.017.257.197 de Medellín y portador (a) de la T.P. No. 340.780 del C.S de la J., para representar los intereses de COLPENSIONES conforme sustitución de poder que le hiciera el apoderado RICHARD GIOVANNY SUAREZ TORRES, identificado con c.c. 79.576.294 y TP. 103.505 del C.S. de la J. representante legal de la firma RST ASOCIADOS PROJECTS S.A.S., con plenas facultades de acuerdo con las previsiones de los artículos 74 y 75 del CGP debidamente inscrito ante la Cámara de Comercio de Bogotá según consta en el Certificado de Existencia Representación Legal que acompaño, en su calidad de apoderado judicial de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –COLPENSIONES–, de acuerdo con la escritura pública N° 3377 de 2 de septiembre de 2019 de la Notaría 9 del Círculo de Bogotá.

El Magistrado del conocimiento, doctor **ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**, en acatamiento de lo previsto en el artículo 13 de la Ley 2213 de 2022, sometió a consideración de los restantes integrantes de la Sala el proyecto aprobado en sala virtual en el **ACTA 019** de discusión, que se adopta como sentencia, en los siguientes términos:

#### **1. SÍNTESIS FÁCTICA y ANTECEDENTES**

##### **1.1. LO PRETENDIDO**

Pretende la parte actora se condene a COLPENSIONES al reconocimiento y pago los intereses moratorios regulados en el art. 141 de la Ley 100 de 1993 por la mora en el reconocimiento del retroactivo pensional causado y las costas del proceso. Igualmente se había solicitado el reconocimiento de incrementos pensionales e indexación, pretensiones frente a las cuales se presentó desistimiento.

## **1.2. PARA FUNDAMENTAR SUS PRETENSIONES, EN SÍNTESIS, EXPUSO LOS SIGUIENTES HECHOS:**

- Que mediante Resolución 022358 de 2012 el ISS le reconoció la pensión de vejez desde el 6 de febrero de 2011, sin reconocerle intereses moratorios ni los incrementos pensionales.
- Que el 25 de agosto de 2016 solicitó a COLPENSIONES los intereses moratorios.

## **1.3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA**

Controvirtió COLPENSIONES el derecho pretendido oponiéndose a la prosperidad de las pretensiones y frente a los hechos indicó que ninguno les consta.

## **1.4. DECISIÓN PRIMERA INSTANCIA**

Mediante sentencia proferida el 30 de julio de 2021 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bello, **ABSOLVIÓ** a **COLPENSIONES** de todas las pretensiones formuladas en su contra por el señor **ROBERTO ANTONIO BEDOYA RODRÍGUEZ**, a quien condenó en costas fijando las agencias en derecho en la suma de \$100.000.

## **2. ARGUMENTOS**

### **2.1. ARGUMENTOS DE LA JUEZ**

Estimó que no era procedente el reconocimiento de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993, toda vez que según se observa en la resolución 022358 de 2012 al actor se le reconoció la pensión de vejez bajo la figura de la pensión compartida, pues ya venía siéndole reconocida una pensión de jubilación por el HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA conforme a la

resolución No. 427 de 2000 y como la entidad continuó cotizando al sistema, una vez el demandante cumplió los requisitos, dispuso COLPENSIONES en la aludida resolución reconocerle pensión de vejez compartida, disponiendo que el retroactivo causado entre el 6 de febrero de 2011 y el 30 de agosto de 2012 por valor de \$16.070.998, el cual se dejó en suspenso hasta que se allegaran unos documentos que le fueron solicitados, sin embargo a juicio de la a quo en esta resolución no se indicó a quien se dispuso el pago del mismo y tampoco hay constancia de cuál fue la fecha en que finalmente se realizó el pago, por tanto concluyó la juez de instancia que ante la ausencia de prueba que de cuenta que en efecto ese retroactivo fue pagado al demandante y la fecha en que se hizo el pago, para poder determinar hasta que fecha deberían causarse los intereses, no es posible reconocer los intereses moratorios solicitados, por lo que ABSOLVIÓ a COLPENSIONES de todas las pretensiones formuladas en su contra.

## **2.2. CONSULTA**

La presente decisión fue enviada para ser conocida en el grado jurisdiccional de CONSULTA por haber sido adversa a los intereses del demandante, conforme a la sentencia C-424 de 2015 que declaró condicionalmente exequible el artículo 69 del C.P.T. y la S.S., *“entendiéndose que también serán consultadas ante el correspondiente superior funcional, las sentencias de única instancia cuando fueren totalmente adversas a las pretensiones del trabajador, afiliado o beneficiario”*

## **2.3. ALEGATOS DE CONCLUSIÓN**

### **2.3.1. ALEGATOS DE COLPENSIONES**

Solicita que se confirme la sentencia absolutoria de primera instancia, toda vez que mediante la resolución 022358 del 2012, COLPENSIONES, reconoció pensión de vejez al señor ROBERTO ANTONIO BEDOYA RODRIGUEZ; sin embargo no es procedente acceder al reconocimiento de los incrementos pensionales consagrados en el artículo 21 del Decreto 758 de 1990, dado que según dispone el 22 de dicha normatividad los incrementos no hacen parte integrante de la pensión, además la Ley 100 de 1993, nada dispuso respecto a la concesión de tales incrementos y el artículo 36 de la Ley 100 de 1993 que contempla el régimen de transición, únicamente mantuvo las condiciones de edad, tiempo y monto contenidas en la legislación anterior y no se refirió a prestaciones distintas como los incrementos pensionales que en este caso se pretenden. En ese orden de ideas, a criterio de la Corte se sostiene de manera clara que con ocasión de la expedición de la ley 100 de 1993, el referido artículo 21 del decreto 758 de 1990 fue objeto de derogatoria a

partir del 1º de abril de 1994, fecha en la cual la ley 100 de 1993 entró a regir, motivo por el cual no es procedente su reconocimiento en el presente caso, pues el demandante alcanzó su estatus pensional con posterioridad al 1 de abril de 1994, pues tal como ya se indicó empezó a disfrutar de su pensión a partir del año 2012 y si bien es beneficiario del régimen de transición y más específicamente de la ley 758 de 1990, dicha aplicabilidad se dio solo para el reconocimiento pensional, en tanto el incremento es un derecho accesorio que no tiene aplicación en su caso concreto, por cuanto el demandante no cuenta con una expectativa legítima de adquirirlo.

### **2.3.2. ALEGATOS DEMANDANTE**

Señaló se debe revocar la sentencia y reconocer los intereses moratorios a favor del demandante, ya que el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 los consagró por el incumplimiento en el pago de las pensiones de invalidez, vejez y sobrevivientes, en un plazo para reconocer la pensión de vejez de 4 meses, según el artículo 19 del Decreto 656 de 1994. Sobre la procedencia de estos intereses en el caso de retardo en el reconocimiento de la prestación, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia se había pronunciado en el sentido de que la tardanza en el reconocimiento del derecho pensional generaba su causación, pues el pensionado no debía soportar la carga del retraso una vez obtenidos los requisitos para el reconocimiento de la pensión y cumplidos los términos de ley. En efecto, en sentencia SL2941-2016- Radicación n.º 52529 reitera la doctrina referida a que los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 se generan por el retardo en el pago de las mesadas pensionales, sin que para ello resulte menester evaluar las circunstancias por las que el derecho pensional se encontraba en discusión o el actuar de las entidades encargadas del reconocimiento y pago del derecho pensional. Se retoma lo indicado en la sentencia con Radicado 42783 del 13 jun. 2012 en el que se indica que el concepto de buena o mala fe o las circunstancias particulares que hayan conducido a la discusión del derecho pensional no pueden ser considerados para establecer la procedencia de los intereses de mora de que trata el artículo 141 de la Ley 100 de 1993. Y si bien se ha consolidado un precedente referido a unos casos precisos y excepcionales en los que no resulta procedente la condena a estos intereses, éste se circunscribe a aquellos eventos en los cuales la administradora de pensiones negó el derecho con apego minucioso a la ley vigente aplicable al caso concreto o cuando el reconocimiento de la prestación obedeció a un cambio de criterio jurisprudencial que dicha entidad no podía prever.

En cuanto a la negativa de reconocer intereses moratorios, respetuosamente no estoy de acuerdo con la posición asumida por el Juzgado a-quo toda vez que el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, que en caso de mora en el pago de las mesadas pensionales previstas en el Sistema General de Pensiones, la entidad correspondiente reconocerá y pagará al pensionado, además de la obligación

a su cargo y sobre el importe de ella, la tasa máxima de interés moratorio vigente en el momento en que se efectúe el pago. Respecto a la fecha a partir de la cual empiezan a correr los intereses, ha precisado la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia que ellos se generan a partir del vencimiento del término de gracia que se les ha otorgado a las administradoras para resolver de fondo la solicitud elevada por el afiliado, postura que recordó en la sentencia SL5577 de 5 de diciembre de 2018 radicación N° 72383. Así las cosas, cuando se trate del reconocimiento de pensiones de vejez y de invalidez, los intereses moratorios empiezan a correr a partir del vencimiento de los cuatro meses dados a las administradoras pensionales para resolver la petición, mientras que para la pensión de sobrevivientes dicho término corre a partir de los dos meses siguientes a la fecha en que se hizo la reclamación. (...) Así, no es posible exonerar a la entidad demandada de su obligación de pagar intereses de mora, pues además de ser un criterio objetivo ante la falta de pago, para poder exonerarse del pago de intereses moratorios, a las administradoras de pensiones no les basta reconocer el derecho en término, sino que ese acto jurídico debe comprender la totalidad de las mesadas pensionales a que tiene derecho, pues de no ser así o hacerlo de manera parcial, los intereses corren sobre cada una de las mesadas adeudadas.

### **3. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA JURÍDICO EN ESTA INSTANCIA**

Se contrae a determinar si el demandante tiene derecho al reconocimiento de los intereses moratorios consagrados en el art. 141 de la Ley 100 de 1993 sobre el retroactivo liquidado en la Resolución 022358 de 2012 a través de la cual el otrora ISS reconoció la pensión de vejez.

### **CONSIDERACIONES**

En primer lugar, en relación los intereses moratorios consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, se tiene que, al tenor de la referida norma, estos se causan por la simple mora o retardo en el pago de las mesadas pensionales, por lo que inicialmente para su concesión se acudió a un criterio objetivo, al examinar si la prestación se otorgó o no dentro del término estipulado por la ley, sin atender a criterios de buena o mala fe de la entidad, en cuanto se trataba simplemente del resarcimiento económico. Sin embargo, tal posición se fue morigerando a partir de la sentencia con radicado 44454 del 2 de octubre de 2013, dada una nueva integración de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, al considerar que dichos intereses no eran procedentes en aquellos eventos en que las actuaciones de las administradoras de pensiones al no reconocer o pagar las prestaciones periódicas a su cargo dentro de los plazos estipulados, se encuentren justificadas, bien sea porque tenga respaldo normativo o porque su postura provenga de la aplicación minuciosa de la ley, sin los

alcances que en un momento dado le haya dado la jurisprudencia en su función de interpretar las normas.

En el caso de la pensión de vejez, los intereses moratorios se causan 4 meses después de la presentación de la solicitud, toda vez que es el tiempo establecido en el artículo 9 de la Ley 797 de 2003 para que la entidad o fondo de pensiones resuelva sobre el derecho.

Parecería entonces que le correspondería a la Sala examinar el contenido de la Resolución 022358 de 2012 para efectos de analizar si medió alguna razón atendible que justificara el retardo en el pago de la pensión de vejez, sin embargo en el caso de autos existen varias falencias probatorias que impiden el reconocimiento de los aludidos intereses.

En primer lugar, no existe dentro del plenario ninguna prueba que de cuenta de cual fue la fecha en que presentó el señor ROBERTO ANTONIO BEDOYA la solicitud de pensión de vejez ante el ISS hoy COLPENSIONES, pues en el referido acto administrativo no se dejó consignado ese dato y tampoco se allegó ninguna otra prueba para tal fin, por tanto no existe certeza de cuándo se presentó la solicitud para poder determinar cuando comenzaría a correr el plazo de los 4 meses con que cuenta la entidad para reconocer la pensión, a efectos de establecer si el mismo fue excedido.

De otro lado, en la Resolución No. 022358 de 2012 se estableció que la pensión de vejez reconocida al señor BEDOYA RODRÍGUEZ se trataba de una pensión compartida con la pensión de jubilación anticipada que fue concedida al actor por el empleador ESE HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA a través de Resolución No. 724 de 2002, es decir, que al empleador haber continuado cotizando, el mismo había quedado subrogado en el riesgo, quedando a su cargo solo el mayor valor de la pensión, conforme lo dispone el artículo 5º del Decreto 813 de 1994 subrogado por el artículo 2º del Decreto 1160 de 1994 en concordancia con el artículo 45 del Decreto 1748 de 1994 y el artículo 5º del Decreto 2879 de 1985.

En dicha resolución además se indicó que si bien se generó un retroactivo en la suma de \$16.070.998 por las mesadas causadas a partir del 6 de febrero de 2011, el mismo se dejaría en SUSPENSO por no existir autorización expresa para el giro del mismo al empleador ESE HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA.

Por tanto, es claro que el retroactivo aludido sería girado al empleador ESE HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA, entidad que venía reconociendo la prestación económica hasta que se hiciera efectivo el pago de la mesada pensional por parte de la administradora de pensiones del ISS; sin embargo se

dejó en suspenso hasta que se cumpliera con una serie de requisitos para tal fin, tal como la autorización previa del afiliado.

Lo que significa que no existe prueba de que el demandante haya tenido acceso a dicho dinero, pues según la Resolución en comento el retroactivo sería para la ESE HOSPITAL MENTAL DE ANTIOQUIA, dinero que de alguna forma había ingresado oportunamente a su patrimonio en virtud de la prestación que le venía cancelando su empleador, por lo que el actor no tuvo que sufrir las consecuencias por eventual tardanza de la entidad en reconocer la prestación, dado que su otrora empleador le venía cancelando su mesada pensional de manera oportuna, siendo este último el que eventualmente se pudo ver perjudicado con la tardanza de la entidad, hecho que niquiera quedó establecido.

Aunado a lo anterior, y en gracia de discusión, dentro del plenario tampoco existe constancia de la fecha en que fue pagado el retroactivo, por lo que ni siquiera podría establecerse una eventual condena, ya que no hay forma de determinar que hubo mora, cuando no se probó la fecha de solicitud ni la fecha de pago para poder establecer que se excedió el término legal.

No se aprecia pues, como lo exige el art. 141 de la Ley 100 de 1993, que estemos ante un caso de mora en el pago de mesadas pensionales, normativa cuya finalidad es resarcitoria y no sancionatoria, finalidad que tampoco estaría llamada a satisfacerse en este caso. Precisamente al resolver sobre su pertinencia y exequibilidad la Corte Constitucional, mediante sentencia C-601 de 2000 indicó que:

*“Los intereses de mora tienen como objetivo primordial proteger a las personas de la tercera edad, quienes por sus condiciones físicas, o por razones de la edad o por enfermedad, se encuentran imposibilitadas para obtener otra clase de recursos para su propia subsistencia o la de su familia. Luego, a juicio de la Corte, de no existir el reconocimiento por parte del legislador de los intereses de mora a favor del pensionado se convertirían en irrisorias las mesadas pensionales en caso de un incumplimiento tardío por parte de los organismos de la seguridad social encargados de satisfacer ese tipo de prestaciones sociales, pues la devaluación de la moneda hace que se pierda su capacidad adquisitiva en detrimento de este sector de la población.”*

Así las cosas, concluye la Sala que no hoy lugar al reconocimiento de los aludidos intereses moratorios, tal y como de forma razonada lo estimó el a quo, por lo que la sentencia consultada será CONFIRMADA en su integridad.

Sin costas en esta instancia.

#### 4. DECISIÓN DEL TRIBUNAL

Por lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, Sala Tercera de Decisión Laboral, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, **DECIDE**

**PRIMERO: CONFIRMA** la sentencia proferida el 30 de julio de 2021 por el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bello dentro del proceso ordinario laboral promovido por el señor **ROBERTO ANTONIO BEDOYA RODRÍGUEZ** identificado con c.c. 8.389.836 contra **COLPENSIONES**, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva.

**SEGUNDO:** Sin costas en esta instancia.

Lo anterior se notificará por **EDICTO** que se fijará por la Secretaría por el término de un día.

**Los magistrados**  
(Firmas escaneadas)



**ORLANDO ANTONIO GALLO ISAZA**



**LUZ AMPARO GÓMEZ ARISTIZABAL**



**MARTHA TERESA FLÓREZ SAMUDIO**



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  
SALA LABORAL



**SECRETARÍA**

**EDICTO**

El Secretario de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín:

**HACE SABER:**

Que se ha proferido sentencia en el proceso que a continuación se relaciona:

Demandante: **ROBERTO ANTONIO BEDOYA RODRÍGUEZ**  
Demandado: **COLPENSIONES**  
Radicado No.: **05088-31-05-001-2017-00368-01**  
Decisión: **CONFIRMA ABSOLUCIÓN**  
Fecha de la sentencia: **23/06/2022**

El presente edicto se fija en la página web institucional de la Rama Judicial <https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/100> por el término de un (01) día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 *ibidem*. La notificación se entenderá surtida al vencimiento del término de fijación del edicto.

Se fija hoy 28/06/2022 desde las 08:00 am. y se desfija a las 05:00 pm.

**RUBÉN DARÍO LÓPEZ BURGOS**  
Secretario